



DOCUMENTO DE ANTECEDENTES

18° ASAMBLEA DE ESTADOS PARTES
La Haya, 2-7 de diciembre de 2019





La COALICIÓN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL está conformada por una red de 2.500 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que trabajan en conjunto con el fin de fortalecer la cooperación internacional con la Corte Penal Internacional; asegurar que la Corte sea justa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea tanto visible como universal; y promover leyes nacionales más firmes para llevar justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El Secretariado de la Coalición agradece a los contribuyentes que han apoyado y siguen apoyando el trabajo de la Coalición: la Unión Europea, Irish Aid y los gobiernos de Australia, Austria, Finlandia, Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, Suiza y numerosos individuos comprometidos. Los contenidos de esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la Coalición por la Corte Penal Internacional y no deben ser utilizados de ninguna manera para expresar los puntos de vista de la Unión Europea, Irish Aid o ningún otro contribuyente.

El Secretariado de la Coalición ha tomado las medidas necesarias para asegurar la precisión de su contenido. Cualquier corrección e información adicional será bienvenida. Para obtener más información sobre la Coalición, visite: www.coalitionfortheicc.org

Bezuidenhoutseweg 99 A
2594AC La Haya, Países Bajos

155 E. 44th St, Suite 1715
New York, NY 100 EEUU

info@coalitionfortheicc.org

Síguenos:



Índice

1. Introducción	1
2. La Asamblea de Estados Partes.....	2
3. Sesión de apertura.....	4
4. El Debate General.....	4
5. Pedido para lograr el más alto compromiso político con la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma.....	6
6. Revisión de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma.....	6
7. El apoyo a la CPI y a sus defensores en contra de las interferencias y amenazas externas.....	8
8. Elecciones en la 18° sesión de la AEP.....	9
9. Preparación para la elección del próximo Fiscal de la CPI en la 19° sesión de la AEP.....	11
10. Preparación para la elección de los próximos jueces de la CPI en la 19° sesión de la AEP.....	12
11. Cooperación.....	13
12. No-cooperación.....	15
13. Eficiencia y efectividad de los procedimientos.....	16
14. Participación de las víctimas y reparaciones.....	17
15. Política de la CPI sobre asistencia legal.....	19
16. Universalidad del Estatuto de Roma.....	19
17. Complementariedad.....	21
18. Presupuesto 2020 de la Corte.....	22
19. Relación ONU - CPI.....	25
20. Enmiendas.....	27
21. Mecanismo de Supervisión Independiente	28
22. La resolución ómnibus	28
23. Acrónimos y términos importantes	30

1. Introducción

Este documento tiene por fin brindar información informal a las delegaciones de los Estados Partes, Estados observadores, organizaciones internacionales y regionales, y la sociedad civil que asistan a la 18^o sesión de la Asamblea de los Estados Partes al Estatuto de Roma (AEP) que se llevará a cabo del 2 al 7 de diciembre de 2019 en La Haya, Países Bajos.

Desde 1995, la Coalición por la Corte Penal Internacional ha liderado las iniciativas de la sociedad civil que resultaron exitosamente en la adopción del Estatuto de Roma en el año 1998 y en la creación de la primera corte penal internacional permanente del mundo capaz de llevar ante la justicia a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional (CPI) fue establecida solo cuatro años después.

Desde entonces, la Coalición ha facilitado el acceso y la participación sin precedentes de la sociedad civil de todo el mundo a la AEP y a otras discusiones en torno a la CPI y el sistema del Estatuto de Roma. En la 2^o sesión de la AEP en 2003, la Coalición fue reconocida por los Estados Partes por su “*rol de coordinación y facilitación*”¹.

Al igual que en los años anteriores, la sociedad civil que participa en la 18^o sesión de la AEP coordinará sus actividades a través de la Coalición. La Coalición brindará asistencia a más de 500 participantes de más de 180 organizaciones no-gubernamentales de todas las regiones del mundo para presentar sus opiniones y recomendaciones ante el órgano administrativo de la CPI durante la sesión de la Asamblea.

La sesión anual de la AEP es un foro central para la Coalición y sus miembros, que les permite trabajar con los Estados Partes y otros actores, reflexionar sobre sus respectivas contribuciones al proceso del Estatuto de Roma en los 12 meses previos a la sesión, y pensar cómo fortalecer y proteger el sistema de justicia internacional en el próximo año.

Los acuerdos consultivos de las ONG en la 18^o sesión de la AEP darán a los Estados Partes y a los Estados observadores una oportunidad para intercambiar información y crear relaciones alrededor de objetivos comunes.

En los márgenes de la 18^o sesión de la AEP se llevarán a cabo numerosos eventos paralelos (co-) organizados por la Coalición o por organizaciones miembro, lo que ayudará a crear una plataforma para favorecer el diálogo entre las ONG participantes por un lado, y la Corte, los Estados y las organizaciones internacionales por el otro.

Previo a la 18^o sesión de la AEP y durante la misma, la Coalición continuará promoviendo una Corte justa, efectiva e independiente, poniendo en el eje de la discusión una serie de cuestiones claves a través de documentos de apoyo, cartas, encuentros, conferencias de prensa y otros eventos.

Al final de cada día de trabajo de la sesión anual, la Coalición publicará un resumen informal diario en el Centro de Noticias de la Coalición llamado #GlobalJustice que se podrá encontrar en <http://www.coalitionfortheicc.org/assembly-of-states-parties-2019>.

¹ ICC-AP/2/Res.8 https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP2-Res-08-ENG.pdf

2. La Asamblea de Estados Partes

La Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (AEP) es el órgano de supervisión administrativo y legislativo de la CPI. La AEP comprende a todos los Estados Partes al tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma (ER).

Es importante notar que aunque la AEP cumple funciones de supervisión legislativa y administrativa para la CPI, tiene estrictamente prohibido interferir con la independencia judicial o procesal de la Corte.

La Mesa y la Presidencia de la AEP

La AEP cuenta con un comité ejecutivo – la Mesa de la AEP – conformado por un presidente, dos vicepresidentes y (usualmente) 18 Estados Partes elegidos por la Asamblea teniendo en cuenta criterios de distribución geográfica y de representación de los principales sistemas legales del mundo. Los presidentes y vicepresidentes de la AEP, así como los miembros de la Mesa, son elegidos por períodos de tres años.

La Mesa ayuda a la AEP a cumplir con sus mandatos y regularmente se reúne en New York, Estados Unidos, y en La Haya, Países Bajos. La Mesa cuenta con dos grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo de New York (GTNY) y el Grupo de Trabajo de La Haya (GTLH); cada uno de ellos es presidido por uno de los vicepresidentes de la AEP.

El presidente de la AEP, los vicepresidentes y los 18 miembros de la Mesa fueron elegidos por consenso por la Asamblea durante la 16^o sesión de la AEP, y asumieron sus funciones inmediatamente después del cierre de la sesión el 15 de diciembre de 2017.

Al actual presidente de la AEP, el S.E. el Sr. O-Gon Kwon de la República de Corea, lo acompañan los vicepresidentes S.E. el Embajador Michal Mlynár de Eslovaquia (basado en New York) y S.E. el Embajador Jens-Otto Horslund de Dinamarca (basado en La Haya).

Los actuales miembros de la [Mesa](#) son:

Argentina	Australia	Austria
Dinamarca	Bangladesh	Colombia
Costa de Marfil	Ecuador	Estonia
Francia	Gambia	Ghana
Japón ²	México	Países Bajos
República de Corea	Senegal	Serbia
Eslovaquia	Eslovenia	Uganda

²Japón ha renunciado temporalmente como miembro de la Mesa por un año a favor del Estado de Palestina en el fin de la 18^o sesión de la AEP, como parte de un acuerdo de banca compartida acordado por Bangladesh, Japón y el Estado de Palestina, candidatos a las elecciones de la Mesa de 2017.

Secretaría de la AEP

La AEP cuenta con una Secretaría permanente (Secretaría de la AEP) ubicada en La Haya, dirigida por el Sr. Renan Villacis. La Secretaría de la AEP brinda asistencia administrativa, técnica, independiente y sustantiva a la AEP, la Mesa y varios órganos subsidiarios.

Estados Partes

La AEP está compuesta por 122 Estados que han ratificado o adherido al Estatuto de Roma. Aunque cada Estado Parte recibe un voto en el proceso de decisión de la AEP (Artículo 112(7) del ER), tanto el Estatuto de Roma como la Mesa de la AEP alientan a los Estados a buscar el consenso en las cuestiones sujetas a votación; solo cuando esto no es posible, se recurre a una votación.

Observadores

Los Estados que han firmado el Estatuto pero no han ratificado o firmado el Acta Final de la Conferencia de Roma, así como las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y los medios, pueden participar en las reuniones de la Asamblea como 'observadores'. La participación en las sesiones de la AEP le da a estos grupos una oportunidad para interactuar con el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. Los Estados observadores que no son parte al Estatuto pueden, por ejemplo, realizar declaraciones durante el Debate General o en otras discusiones plenarias, compartir las novedades sobre la ratificación y/o implementación del Estatuto de Roma, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC), o celebrar acuerdos voluntarios de cooperación con la Corte.

Sesiones de la Asamblea de Estados Partes

La AEP se reúne en lo que se conoce como 'sesión' al menos una vez al año, en Nueva York o en La Haya. La 18^o sesión de la AEP se llevará a cabo en el World Forum Convention Center en La Haya, Países Bajos, del 2 al 7 de diciembre de 2019.

Los Estados Partes utilizan las sesiones anuales de la AEP para discutir y decidir sobre cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento y el éxito de la CPI y el sistema del Estatuto de Roma en general. Dichas cuestiones pueden implicar obligaciones claves de los Estados Partes en relación con la cooperación y la complementariedad, así como cuestiones institucionales centrales, como el presupuesto anual de la CPI o la eficiencia de los procedimientos de la Corte.

Además de tomar decisiones, en cada sesión anual la AEP le asigna a la Mesa la tarea de facilitar las discusiones del próximo año sobre una serie de cuestiones significativas para las actividades de la CPI y la AEP. Estos temas son asignados a los Grupos de Trabajos de La Haya o Nueva York, también se designan (co) facilitadores o (co)puntos focales de los Estados Partes para liderar discusiones específicas.

En cada sesión anual, la AEP asigna a los cuerpos subsidiarios, como el Comité de Presupuesto y Finanzas, los órganos de la Corte y en algunas oportunidades a actores externos independientes, la tarea de informar a la Asamblea sobre los temas más relevantes a ser discutidos durante el año siguiente, con el fin de contar con la información necesaria para el proceso de toma de decisiones. Estos informes, y otra información sobre la AEP, están disponibles en el sitio Web oficial de la AEP en <https://asp.icc-cpi.int>.

La 18^o sesión de la AEP

Aunque los resultados de cada sesión anual de la AEP reflejan los temas específicos discutidos dicho año, generalmente suelen ser temas generales. Se espera que para el cierre de la 18^o sesión el plenario de la AEP haya adoptado textos, en forma de resoluciones independientes o como parte de una Resolución ómnibus,

sobre temas relacionados con las próximas elecciones judiciales y con la elección de un nuevo fiscal, el proceso de revisión de la CPI, la universalidad, la cooperación, la relación entre la CPI y las Naciones Unidas, las víctimas y las comunidades afectadas, la complementariedad, las enmiendas al Estatuto de Roma, y el presupuesto 2020 de la CPI, entre otros.

En los márgenes de la sesión de la AEP se llevarán a cabo un gran número de eventos paralelos mayormente (co)organizados por la sociedad civil. En los desayunos, los almuerzos o los eventos de la tarde se discutirán los temas de la agenda de la Asamblea y otros temas relacionados con el trabajo y el impacto de la CPI. La información de todos los eventos paralelos estará disponible en la publicación de la AEP (ASP Journal) donde encontrarán una agenda diaria y un resumen de las sesiones del plenario y los eventos paralelos que se llevarán a cabo durante la 18^o sesión de la AEP.

La publicación de la AEP está disponible en el [Sitio Web de la AEP](#) y se [actualiza](#) regularmente durante la sesión anual.

3. Sesión de apertura

La 18^o sesión de la AEP comenzará el lunes 2 de diciembre de 2019 con una sesión plenaria dedicada a las tareas preliminares (y administrativas). Normalmente, en la sesión de apertura también se presentan varias cuestiones claves – a cargo del Presidente de la AEP, el Presidente de la CPI y la Fiscal de la CPI - y posiblemente algunas declaraciones a cargo de los Jefes de Estado o gobierno presentes, ministros, u otros representantes estatales o de organizaciones intergubernamentales de alto nivel.

La Asamblea comenzará con la adopción formal de la agenda de la 18^o sesión de la AEP, y luego se llevará a cabo la elección de un miembro de la Mesa y la designación del Comité de Credenciales.

Tras dirigirse a los Estados con moras para que cumplan con sus obligaciones financieras pendientes, la Asamblea escuchará los informes sobre las actividades de la Corte, el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, la Mesa, entre otros.

La Asamblea elegirá a seis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas, llenará una vacante de ese mismo Comité, y se elegirá un miembro del Comité Asesor para las Nominaciones judiciales. (Ver el capítulo 8 para obtener más información sobre las elecciones).

4. El Debate General

El Debate General está programado para los primeros dos días de la sesión de la AEP (2 y 3 de diciembre de 2019). El Debate General presenta una oportunidad para que los participantes traten cuestiones relacionadas con su trabajo y el sistema general de justicia internacional del Estatuto de Roma.

El Debate General de la AEP también permite realizar declaraciones de alto nivel en apoyo a la CPI y el sistema del Estatuto de Roma. En estas declaraciones, los Estados Partes, no-partes, las organizaciones regionales e internacionales, y la sociedad civil pueden reiterar su apoyo a la Corte y compartir sus progresos hasta el momento, así como identificar aquellas áreas en las que la CPI puede seguir mejorando para cumplir con los objetivos de su innovador mandato.

Por otro lado, el Debate General representa una oportunidad para informar a los participantes de la AEP

sobre las medidas que se han tomado en torno a la ratificación o la adhesión al Estatuto de Roma, así como los avances realizados en la implementación a nivel nacional del Estatuto y la ratificación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte (APIC). Las delegaciones también pueden utilizar el Debate General para destacar esfuerzos específicos emprendidos para mejorar la cooperación con la Corte.

Por mucho tiempo, la Coalición ha venido alentando a los Estados a aprovechar esta oportunidad para expresar su apoyo a la lucha contra la impunidad a través del sistema del Estatuto de Roma, además de asumir posiciones formales con respecto a varias cuestiones que serán sometidas a discusión. En la 18^o sesión de la AEP, algunas de estas cuestiones que los Estados deberán considerar en sus declaraciones del Debate General incluirán:

- El **compromiso** incondicional con la CPI como pilar de la lucha contra la impunidad y como elemento clave de un orden internacional basado en reglas;
- El compromiso a trabajar juntos como Estados Partes para **enfrentar y abordar las acciones que intenten socavar el trabajo de la Corte y su independencia** y, en particular, las amenazas contra la CPI, sus funcionarios, y quienes cooperan con la Corte;
- La necesidad de proteger la **integridad del Estatuto de Roma** y sus principios históricos;
- La oportunidad que ofrece el **actual proceso de revisión de la CPI** de reunir a los Estados, oficiales de la Corte, expertos, y la sociedad civil, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el trabajo de la Corte y asegurar que pueda ejercer su mandato y alcanzar su máximo potencial en los próximos años;
- El compromiso a fortalecer y defender la **independencia judicial y procesal** de la CPI.
- El compromiso de asegurar un **proceso electoral proactivo, justo, informado y transparente para seleccionar al nuevo Fiscal de la CPI**; y de nominar y elegir a los candidatos mejor calificados para las elecciones judiciales 2020;
- El compromiso a brindar una **cooperación sólida**, mejorar los esfuerzos para ejecutar las órdenes de arresto, celebrar **acuerdos de cooperación voluntarios** con la CPI, y ratificar el **Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC)**;
- La necesidad de lograr la **universalidad del Estatuto de Roma**, así como su **plena y efectiva implementación** en los ordenamientos internos;
- El compromiso a cumplir con sus obligaciones de **complementariedad** y crear capacidades al interior de los sistemas legales nacionales;
- El **compromiso financiero** de los gobiernos con la CPI, para así permitirle ejecutar efectivamente el mandato que los Estados le han dado, sin limitaciones políticas o arbitrarias a su presupuesto anual;
- La **centralidad de las víctimas – esto implica su participación significativa** en el sistema del Estatuto de Roma y el **derecho a recibir reparaciones**;
- El rol central de las organizaciones de la sociedad civil y de los **defensores de los derechos humanos** que luchan para llevar justicia a las víctimas de todo el mundo, y el compromiso de apoyar, defender y proteger a los defensores de los derechos humanos y su trabajo;
- El compromiso a reconocer el sistema de justicia del Estatuto de Roma como un factor clave a la hora de promover la rendición de cuentas a nivel internacional y nacional por los casos de **violencia sexual y de género y la violencia contra los niños**, reconocidos como crímenes graves, es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio;

- El apoyo total a la **sensibilización y la información pública**, y el reconocimiento de su crucial importancia a la hora de elevar el perfil de la Corte, crear ambientes propicios para el trabajo de la CPI, y manejar las expectativas;
- El rol integral del sistema del Estatuto de Roma **en la prevención de conflictos y en la construcción de una paz sostenible**; en la implementación del objetivo 16 de los ODS, y en la promoción del rol indispensable de la mujer en los procesos de paz y justicia internacionales.

La lista de oradores del Debate General estará disponible antes del comienzo de la AEP; se sugiere a cada orador un máximo de cinco minutos. Los participantes también pueden contribuir con el Debate General realizando presentaciones escritas para su publicación en el sitio Web de la AEP.

La sociedad civil también participa en el Debate General. Alrededor de 10 organizaciones no-gubernamentales individuales, entre ellas la Coalición por la CPI, darán declaraciones durante el mismo. Los temas presentados por la sociedad civil en el Debate General generalmente nutren el proceso de toma de decisiones de los Estados Partes durante toda la sesión de la AEP.

Para la sociedad civil, el Debate General también sirve como un foro para poner el foco sobre ciertas cuestiones preocupantes que no ocupan un lugar importante – o que directamente no se contemplan – en el programa de la AEP. De esta forma, la sociedad civil puede llevar la atención, no solo sobre sus contribuciones en estas áreas, sino también sobre su habilidad para asistir o colaborar en dichas áreas con los Estados Partes interesados.

5. Pedido para lograr el más alto compromiso político con la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma

Desde su adopción en el año 1998, el Estatuto de Roma ha mantenido la promesa de ofrecer recursos de justicia para las víctimas, y poner fin a la impunidad para los perpetradores de los crímenes que impactan en la conciencia de la humanidad. Sin embargo, dicha promesa se ve cada vez más amenazada por un clima global caracterizado por una retirada del compromiso multilateral y el surgimiento de olas de hostilidad, discriminación y represión en todo el mundo. Por otro lado, el aumento de los ataques en contra de la CPI y sus oficiales, y la posibilidad de nuevas denuncias al Estatuto de Roma continúa debilitando el sistema del Estatuto de Roma y su apoyo en todo el mundo.

Por todo esto, la sesión de la AEP de este año ofrece una oportunidad única para reafirmar el compromiso colectivo de la comunidad internacional con los derechos humanos, la rendición de cuentas y el Estado de derecho. También ofrece una plataforma clave para continuar debatiendo cómo fortalecer la Corte, esto incluye los actuales debates sobre áreas centrales que deberán ser revisadas en los próximos años.

Por ello, pedimos a los gobiernos que expresen su compromiso político de manera firme y continua con el Estatuto de Roma y la CPI a través de su participación en la 18^o sesión de la AEP, al más alto nivel posible.

6. Revisión de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma

Motivados por diversos pedidos de revisión del desempeño de la Corte, realizados por los Estados, los oficiales de la Corte, la sociedad civil y otros actores involucrados, el pasado 15 de julio de 2019, el Presidente de la AEP y dos vicepresidentes prepararon la primera versión del borrador de un documento titulado “Matriz de las posibles áreas de fortalecimiento de la Corte y el sistema del Estatuto de Roma” (la Matriz).

La Matriz es un documento que define algunos de los desafíos que enfrenta hoy en día la Corte, e identifica acciones que podrían llevarse a cabo con el fin de fortalecerla. La Matriz es un documento vivo que la Presidencia de la AEP seguirá modificando de acuerdo al avance de las discusiones en los diversos grupos de trabajo de la AEP, mientras que otras cuestiones serán asignadas a un grupo de expertos independientes que estarán a cargo de una “Revisión Independiente de Expertos” (RIE). Los plazos del proceso serán discutidos por la AEP.

El borrador de los Términos de Referencia de la Revisión Independiente de Expertos de la CPI identifica el proceso de selección de expertos independientes, su mandato y el objetivo general de la RIE, es decir, “identificar formas de fortalecer la Corte y el sistema del Estatuto de Roma con el fin de promover el reconocimiento universal de su rol central en la lucha contra la impunidad y mejorar su funcionamiento, respetando a la vez los principios establecidos en el Estatuto, esto incluye aquellos vinculados con la complementariedad, la integridad y la independencia judicial y procesal”.

Los expertos tendrán el mandato de llevar a cabo una revisión sobre cuestiones relacionadas con tres grupos temáticos identificados por los Estados Partes:

- (i) Gobernanza- Se enfocará, entre otras cosas, en el marco para la gobernanza, la coordinación y la cooperación entre los diferentes órganos, las políticas de administración y la cultura de liderazgo.
- (ii) Sistema judicial - Se enfocará en varias cuestiones relacionadas con el sistema judicial, esto incluye la estructura, la organización, la administración, el personal y los métodos de trabajo.
- (iii) Investigaciones y juicios – Considerará la estructura, la organización, la administración, el personal y los métodos de trabajo de la Fiscalía.

Los miembros de la Coalición han reafirmado que la independencia procesal y judicial debe ser respetada en todas las etapas del proceso de revisión.

Se espera que la Revisión Independiente de Expertos esté a cargo de seis/nueve individuos, dos o tres por cada grupo temático. Los Estados y la sociedad civil fueron invitados a sugerir expertos a la Presidencia de la AEP.

Los expertos serán designados por la Asamblea teniendo en cuenta (i) una representación equilibrada de los principales sistemas legales del mundo; (ii) una representación geográfica equitativa; y (iii) el balance de género; el conocimiento y la experiencia serán también principios claves a tener en cuenta. Los expertos deben comenzar a trabajar en enero del año 2020, con el objetivo de presentar su informe final en septiembre de 2020, para que sus conclusiones puedan ser consideradas en la 19^o sesión de la AEP en 2020.

Los Estados, la Corte y la sociedad civil han participado y comentado el contenido y los métodos de trabajo de este documento. La sociedad civil sigue siendo un actor clave que apoya firmemente el proceso de revisión que busca fortalecer a la Corte. Los miembros de la Coalición se han comprometido activamente en las consultas sobre la Matriz y la Revisión Independiente de Expertos para exigir un proceso de revisión transparente e incluso que (i) respete los principios de independencia procesal y judicial; (ii) proteja el sistema del Estatuto de Roma y los principios fundamentales expresados en el Estatuto de Roma; (iii) y asegure que la Corte pueda ejercer su mandato plenamente en los próximos años.

La sociedad civil también ha promovido una verdadera revisión independiente de expertos que (i) esté conformada por expertos independientes y calificados; (ii) ofrezca las garantías necesarias para que los individuos seleccionados cumplan con su mandato de manera independiente, sin influencias externas de los Estados, la Corte u otros actores involucrados; y (iii) que permita a los expertos revisar las cuestiones que

consideren relevantes, de acuerdo a sus conocimientos y experiencia.

El miércoles 4 de diciembre en la 18^o sesión de la AEP se llevará a cabo una sesión plenaria sobre la “Revisión de la Corte”.

Actualmente, los Estados Partes están discutiendo un borrador de Resolución titulado ‘Revisión de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma’ para su adopción en la AEP.

7. El apoyo a la CPI y a sus defensores en contra de las interferencias y amenazas externas

A medida que la Corte lleva adelante su trabajo, tanto la institución como sus defensores han venido recibiendo ataques crecientes. Uno de los principales ataques del último tiempo fueron las amenazas y las medidas tomadas por el actual gobierno de Estados Unidos.

El [10 de septiembre de 2018](#), la actual administración de Estados Unidos anunció que impondría sanciones estrictas en contra de los oficiales de la CPI ante una posible investigación de la Fiscalía sobre los crímenes presuntamente cometidos en Afganistán por el personal de EEUU, entre otros. El [15 de marzo de 2019](#), el Secretario de Estado de EEUU, Michael R. Pompeo, anunció una política de restricciones de visa en contra del personal de la CPI responsable de cualquier investigación del personal de EEUU y su personal aliado, sin el consentimiento de sus aliados, sobre los presuntos crímenes cometidos en Afganistán. La administración de EEUU amenazó con tomar medidas adicionales, como la imposición de sanciones económicas si la CPI no corregía su curso.

El 5 de abril de 2019, EEUU revocó la visa de la Fiscal de la CPI, la Sra. Fatou Bensouda, mientras aún estaba pendiente una decisión de la CPI sobre el pedido de autorización de la Fiscal para iniciar una investigación sobre Afganistán. El 12 de abril de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI rechazó el pedido de la Fiscal, y declaró que “una investigación sobre la situación de Afganistán en esta instancia no serviría a los intereses de la justicia.”

EEUU no se ha retractado de su política de amenazar y socavar a la Corte Penal Internacional. El [9 de octubre de 2019](#), el Secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, anunció que EEUU seguiría imponiendo sanciones de visa a “todos los oficiales de la CPI que sean directamente responsables de una investigación de la CPI sobre el personal de EEUU o sobre personal aliado, sin el consentimiento de nuestros aliados”.

Es probable que la inacción o las tibias reacciones por parte de los Estados Partes a la CPI a este tipo de amenazas –particularmente aquellas emitidas por las principales potencias mundiales - promuevan la emergencia de una nueva y dañina norma y práctica que protege a los presuntos perpetradores del escrutinio, lo que contribuye a una cultura de impunidad en una era donde las violaciones masivas no se detienen.

Los Estados deben comprometerse a trabajar juntos para oponerse a todos los esfuerzos que surjan para socavar el trabajo de la Corte y su independencia, y, en particular, las amenazas en contra de la CPI, sus oficiales y quienes cooperan con la Corte.

Los Estados deben seguir apoyando a la sociedad civil que se compromete en esfuerzos de justicia internacional; esto incluye asegurar su protección como defensores de los derechos humanos y su acceso a los debates y discusiones sobre el fortalecimiento del sistema del Estatuto de Roma y el acceso a la justicia a las

víctimas de todo el mundo.

Con el fin de reflejar los principios expresados en los párrafos introductorios de la resolución general anual sobre el “*Fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y la Asamblea de Estados Partes*” (la ‘*Resolución Ómnibus*’) que la Asamblea renueva y vuelve a adoptar todos los años, es clave apoyar los puntos mencionados anteriormente.

8. Elecciones en la 18^o sesión de la AEP

En la 18^o sesión, la AEP elegirá a varios individuos para ocupar los siguientes puestos: 6 miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) y un miembro del Comité Asesor para las Nominaciones (CAN). La AEP también tendrá que llenar una vacante del Comité de Presupuesto y Finanzas.

La Coalición sigue de cerca todas las elecciones de la CPI y la AEP con el fin de asegurar que sean justas, transparentes y que lleven a la elección de los candidatos mejor calificados. La Coalición en sí no apoya ni se opone a ningún candidato individual, pero promueve la integridad de los procesos de nominación y elección. La Coalición se opone firmemente a los acuerdos políticos recíprocos (“intercambio de votos”) en las elecciones de la CPI y la AEP.

Como parte de sus actividades de monitoreo y seguimiento de los procesos electorales, la Coalición urge a los Estados Partes a nominar a los candidatos mejor calificados para el CPF y el CAN. Aunque las resoluciones de la AEP que regulan las elecciones del CPF y del CAN alientan las candidaturas consensuadas, la Coalición ha advertido el riesgo de aplicar esta práctica a costas de la calidad de los candidatos, así como el riesgo de otras prácticas cuestionables como el intercambio de votos.

Elección de los miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas

En la 18^o sesión de la AEP, los Estados elegirán a seis miembros y ocuparán una vacante en el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF).

El CPF tiene la tarea de examinar los documentos financieros, presupuestarios y administrativos presentados por la Corte a la AEP, y realizar recomendaciones a la Asamblea sobre el Presupuesto por Programas anual Propuesto por la CPI. Está conformado por doce miembros que son electos por un período de tres años. Los miembros del CPF pueden ser reelectos.

La AEP ha establecido (ICC-ASP/1/Res.4) que los miembros del CPF deben ser elegidos sobre la base de una distribución geográfica equitativa, y deben ser expertos de reconocida experiencia en cuestiones financieras a nivel internacional provenientes de los Estados. Los doce cupos están distribuidos de la siguiente manera:

- Estados de África: 2 cupos
- Estados de Asia-Pacífico: 2 cupos
- Estados de Europa del Este: 2 cupos
- Grupo de América Latina y el Caribe: 2 cupos
- Estados de Europa Oriental y otros Estados: 4 cupos

Luego de la renuncia de la Sra. Ingrid Eiken Holmgren (Suecia), el 18 de marzo 2019, los Estados deben también elegir un candidato para completar lo que queda del término de la Sra. Holmgren, a saber, hasta el 20 de abril 2021; dicho puesto será elegible para una reelección. La vacante corresponde al grupo de los Estados de Europa Oriental y otros Estados (GEOO). Al cierre del periodo de nominación, el 25 de agosto de 2019, los

Estados Partes habían nominado un candidato para ocupar la vacante:

- DRUML, Werner (Austria)

Al cierre del periodo de nominación de los otros seis miembros (al 25 de agosto de 2019), los Estados Partes habían nominado a los siguientes seis candidatos para la elección del Comité de Presupuesto y Finanzas:

- FERNANDEZ-OPAZO, Carolina Maria (México)
- LEE, Urmet (Estonia)
- MATTIYA, Loudon Overson (Malawi)
- MCDONNELL, Daniel (Reino Unido)
- STEIN, Klaus (Alemania)
- VENEAU, Richard (Francia)

Dado que el número de candidatos es equivalente al número de cuotas vacantes, la elección se realizará con “listas cerradas.”

La Coalición ha alentado de manera consistente a los Estados Partes a evitar las elecciones con “listas cerradas”, y a asegurar que las elecciones sean competitivas, abiertas y justas, ya que esto favorece que el sistema del Estatuto de Roma se nutra de nuevas perspectivas y experiencias.

Elección de los miembros del Comité Asesor para las Nominaciones

En la 18^o sesión de la AEP, los Estados elegirán a un miembro del Comité Asesor para las Nominaciones (CAN). El CAN tiene el mandato de facilitar que los individuos mejor calificados sean elegidos como jueces de la Corte Penal Internacional (ICC-ASP/10/36). El Comité realiza evaluaciones de candidatos judiciales teniendo en cuenta los requisitos del Artículo 36 del Estatuto de Roma, y comparte los resultados de sus análisis con los Estados Partes y observadores.

La AEP estableció (ICC-ASP/10/36) que el Comité Asesor para las Nominaciones debe estar conformado por nueve miembros, ciudadanos de los Estados Partes, que deberán ser designados por la Asamblea por consenso; deben reflejar los principales sistemas legales del mundo, tener una representación geográfica equitativa y una representación justa de ambos géneros. Los miembros del CAN deben contar con conocimiento y experiencia en derecho penal o internacional, y deben ser individuos de alto carácter moral. Los miembros del Comité serán nombrados a título personal, y no serán representantes de sus Estados. Los miembros son elegidos por un periodo de tres años, con la posibilidad de ser reelectos una sola vez.

Al cierre del periodo de nominación, el 25 de agosto 2019, los Estados Partes habían nominado al siguiente candidato para la elección del Comité Asesor para las Nominaciones:

- SONG, Sang-Hyun (República de Corea)

Al igual que en el caso del CPF, el número de candidatos para el CAN también iguala al número de cuotas vacantes, lo que resulta en otra elección con “listas cerradas”.

Elección de un miembro de la Mesa de la AEP

Al cierre de la 18^o sesión de la AEP, Japón renunciará como miembro de la Mesa por un año como parte de un acuerdo de banca compartida acordado por Bangladesh, Japón y el Estado de Palestina:

- Del 15 de diciembre de 2017 hasta el cierre de la 17^o sesión de la AEP: Japón y Palestina;
- El día después del cierre de la 17^o sesión de la AEP hasta el cierre de la 18^o sesión: Bangladesh y Japón;

- El día después del cierre de la 18° sesión de la AEP hasta el cierre de la 19° sesión: Bangladesh y Palestina.

9. Preparación para la elección del próximo Fiscal de la CPI en la 19° sesión de la AEP

El Fiscal de la CPI es elegido por un periodo de nueve años por la Asamblea de los Estados Partes, y no puede ser reelecto. La Sra. Fatou Bensouda (Gambia) asumió su cargo el 15 de junio de 2012 como la segunda fiscal de la CPI, luego de ser elegida por consenso durante la 10° sesión de la Asamblea de los Estados Partes en diciembre de 2011. Su mandato finalizará el 15 de junio de 2021.

La elección del próximo fiscal está programada para la 19° sesión de la AEP en 2020, a ser celebrada en Nueva York.

La elección del próximo fiscal de la CPI es una decisión crucial, que impacta prácticamente en todos los aspectos de la Corte. Esta elección sucede en un momento crítico para la CPI: En los años recientes la CPI ha enfrentado desafíos, críticas y numerosos ataques, es por esto que es de suma importancia que la CPI mantenga su independencia e imparcialidad.

El próximo fiscal influirá ampliamente en el futuro de la CPI y la manera en la que enfrentará los desafíos que se le presenten, incluso aquellos que buscan socavar las mismas bases de la Corte.

El Artículo 42 del Estatuto de Roma establece los requisitos para la elección del Fiscal: el individuo elegido debe ser una persona que goce de alta consideración moral, que posea un alto nivel de competencia y tenga extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la substanciación de causas penales. Deberá tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

Los Estados deben intentar elegir al Fiscal por consenso, pero en caso de no lograrlo, la elección se llevará a cabo a través del voto secreto en la cual cada candidato es elegido por una mayoría absoluta de los Estados Partes.

En el cierre del encuentro de la 17° sesión, en el año 2018, la Mesa de la AEP decidió establecer un comité con la tarea de supervisar la elección del Fiscal; esta decisión resultó en el establecimiento de un Comité para la Elección del Fiscal (CEF) unos meses después. El Comité es un órgano conformado por un representante por grupo regional, y tiene el mandato de facilitar la nominación y la elección por consenso del próximo fiscal, y es asistido por un panel de expertos independientes, uno por cada grupo regional, con el fin de llevar a cabo sus funciones.

Tanto los miembros del Comité como los expertos fueron nombrados por la Mesa en junio de 2019.

Miembros del Comité:

- Embajador Marcin Czepelak (Polonia)
- Sr. Lamin Faati (Gambia)
- Embajador Andreas Mavroyiannis (Chipre)
- Embajadora Sabine Nölke (Canadá)
- Embajador Mario Oyarzábal (Argentina)

Panel de expertos:

- Sr. Francisco Cox Vial (Chile)
- Sra. Aurélia Devos (Francia)
- Sr. Charles Jalloh (Sierra Leona)
- Sr. Motoo Noguchi (Japón)
- Sra. Anna Richterová (República Checa)

El CEF aceptó las aplicaciones individuales para el puesto de Fiscal de la CPI a través de un anuncio de vacante abierta publicado en los sitios Web de la CPI y la AEP. La fecha límite para las aplicaciones fue el 31 de octubre de 2019, y fue extendida hasta el 25 de noviembre de 2019. En esta instancia, no se alentaron las nominaciones respaldadas por los Estados Partes y otros grupos.

Antes de que el CEF presente una lista corta de tres a seis de los candidatos mejor calificados, el panel de expertos compartirá una evaluación independiente de los candidatos con el CEF antes de junio de 2020. Esto permitirá que el panel, que no realiza recomendaciones formales a la Mesa, exprese su conocimiento y sus puntos de vista independientes sobre los candidatos a ocupar el puesto de fiscal de CPI.

La Coalición se opone firmemente a los acuerdos políticos recíprocos (“intercambio de votos”) en las elecciones para el próximo Fiscal de la CPI

La Coalición y sus miembros continuarán solicitando a los Estados Partes a que nominen a los candidatos mejor calificados e independientes para ocupar los puestos más importantes del sistema del Estatuto de Roma, a través de procesos de nominación y elección justos, transparentes y basados en los méritos de los candidatos.

10. Preparación para la elección de los próximos jueces de la CPI en la 19^o sesión de la AEP

Los jueces de la Corte Penal Internacional son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por un periodo no renovable de nueve años. Cada tres años, la AEP reemplaza a un tercio de los 18 jueces de la Corte.

Las próximas elecciones judiciales se llevarán a cabo en 2020, durante la 19^o sesión de la Asamblea de los Estados Partes; allí los Estados elegirán a seis nuevos jueces.

La nominación y la elección de los jueces están reguladas por un procedimiento que busca asegurar una representación geográfica equitativa, una representación justa de ambos géneros, que se reflejen los principales sistemas legales del mundo, y que los candidatos cuenten con experiencia y conocimiento. Los jueces electos deben ser individuos de alto carácter moral, imparcialidad e integridad que cuenten con las calificaciones requeridas en sus respectivos Estados para su designación en las más altas funciones judiciales.

Los jueces de la CPI son elegidos de dos listas de candidatos. La Lista A esta compuesta por candidatos con reconocida competencia en derecho y procedimiento penal y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar. La Lista B incluye a los candidatos con reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte. Por otro lado, los Estados Partes también considerarán a los candidatos con reconocida experiencia en cuestiones específicas, como la violencia contra las mujeres y niños.

Los nuevos jueces desempeñarán su cargo por un periodo regular de nueve años, desde 2021-2030, y ocuparán las vacantes de los seis jueces salientes, quienes finalizarán sus mandatos el 10 de marzo de 2021. Los jueces salientes son:

- El juez Chile Eboe-Osuji (Nigeria) - *Actual Presidente de la CPI*
- El juez Robert Fremr (República Checa) - *Actual primer Vicepresidente de la CPI*

- El juez Howard Morrison (Reino Unido)
- La jueza Olga Herrera-Carbuccia (República Dominicana)
- El juez Geoffrey Henderson (Trinidad y Tobago)
- El juez Raul Cano Pangalangan (Filipinas)

El Estatuto de Roma define varias consideraciones para contar con un tribunal realmente representativo, esto incluye criterios mínimos de representación geográfica, una representación justa de ambos géneros, que reflejen los principales sistemas legales del mundo y que cuenten con experiencia en cuestiones legales específicas y relevantes. Por otro lado, estos criterios buscan asegurar un equilibrio entre los jueces de la Lista A y de la Lista B.

Estos factores son aplicados a través de requisitos mínimos de votación (RMV) que se establecen teniendo en cuenta los criterios de los jueces que permanecen en el tribunal. Durante las elecciones del año 2020, tendrán lugar los siguientes RMV:

- Un candidato de Europa del Este
- Dos candidatos de Latinoamérica y el Caribe
- Un candidato de Asia-Pacífico
- Un candidato de la lista A
- Un candidato de la lista B
- Una candidata mujer

Dado el papel crucial que desempeñan los jueces en el sistema del Estatuto de Roma, es de suma importancia que solo los candidatos mejor calificados sean nominados y elegidos. En este aspecto, la Coalición se opone firmemente a los acuerdos políticos recíprocos (“intercambio de votos”) en las elecciones de la CPI y la AEP.

11. Cooperación

La cooperación es una parte absolutamente vital del sistema de justicia internacional establecido por el Estatuto de Roma. La cooperación debe ser multifacética para permitir la efectiva ejecución de varias funciones de la CPI dirigidas colectivamente a llevar a los mayores responsables de los principales crímenes internacionales ante la justicia. Al no contar con un mecanismo de ejecución propio, la CPI depende mayormente de la cooperación que recibe de los Estados, las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e internacionales, y otros actores relevantes.

La parte IX del Estatuto de Roma describe las diferentes maneras en las que los Estados pueden cooperar con la CPI. Sin este apoyo, la justicia internacional simplemente no podría trabajar y es por este motivo que la Coalición monitorea de cerca durante el año los avances y las iniciativas de la Mesa y la CPI en áreas de cooperación como parte de los preparativos para la sesión anual de la AEP.

En la AEP de este año se ha programado una sesión plenaria sobre Cooperación, que tendrá lugar el jueves 5 de diciembre de 2019, titulada “La cooperación interestatal e interinstitucional en el corazón de los desafíos de cooperación” (a partir del 20 de noviembre).

Facilitación de la cooperación en 2019

Las discusiones que se llevaron a cabo en el transcurso de 2019 en el Grupo de Trabajo de La Haya sobre cooperación fueron facilitadas por el Embajador Momar Guèye (Senegal). Hasta la partida del Embajador Philippe André Lalliot (Francia), el Embajador Luis Vassy (Francia) aceptó ocupar el cargo de co-facilitador

sobre Cooperación.

En 2007, la Asamblea adoptó *66 Recomendaciones sobre cooperación*, una lista amplia con los principales desafíos y prioridades para la cooperación. En los años siguientes, la AEP ha reducido la lista a siete recomendaciones prioritarias para las actuales demandas de cooperación de la Corte.

Plataforma compartida de cooperación

Los co-facilitadores de cooperación anunciaron en 2019 sus esfuerzos para crear una plataforma segura y compartida en el sitio Web de la AEP, con el fin de facilitar el intercambio de información entre los Estados para aumentar la capacidad de cooperar de los mismos con la Corte.

Arrestos y entregas

La CPI depende completamente de los sistemas legales nacionales para implementar sus órdenes, esto incluye sus órdenes de arresto, y hay una urgencia absoluta en el cumplimiento de las órdenes de arresto. Sin arrestos, los casos de la CPI no pueden llevarse a cabo, y el objetivo de la Corte es derrotado. La ejecución de las órdenes de arresto requiere de una fuerte voluntad política y presión diplomática, que los Estados Partes deben intentar ejercer durante la 18^o sesión. De no ejecutar estas órdenes, los Estados deben comprometerse a evitar cualquier contacto no esencial con personas que están sujetas a órdenes de arresto de la CPI.

En su 13^o sesión, la Asamblea destacó un informe sobre estrategias de arresto presentado por el Relator, e invitó a la Mesa a continuar las discusiones sobre el tema con el fin de presentar un boceto de Plan de Acción consolidado sobre estrategias para el arresto para la consideración de la Asamblea. En sus sesiones 14^o y 15^o, la Asamblea destacó el *Informe sobre el borrador del Plan de Acción sobre las estrategias de arresto*, y ordenó a la Mesa a continuar considerando las recomendaciones allí plasmadas con el objetivo de adoptarlas. En 2017 y 2018 se llevaron a cabo consultas informales.

La sesión plenaria sobre cooperación de la 17^o sesión de la AEP contó con un segmento dedicado a esta cuestión.

Campaña sobre los arrestos de la CPI

Durante el seminario de noviembre de 2018 sobre arrestos, también se realizó el lanzamiento de una campaña de promoción y redes sociales de la CPI dirigida a crear conciencia sobre los arrestos y la entrega de sospechosos a la Corte. Con 16 órdenes de arresto en contra de 15 individuos aún pendientes, la campaña apunta a resaltar este componente crucial del marco de cooperación. La campaña de la Corte incluye la creación y la actualización periódica de un [sitio Web](#) dedicado a los sospechosos que aún no han sido detenidos.

Acuerdos voluntarios de cooperación

De manera regular, la Corte pide a los Estados Partes que complementen sus obligaciones explícitas con el Estatuto de Roma con formas de cooperación voluntarias, que resultan cruciales para el funcionamiento de la CPI como una institución legal justa y efectiva que da efecto no solo a los derechos de las víctimas y los testigos, sino también a los acusados. Dicha cooperación voluntaria también puede tomar la forma de acuerdos marco bilaterales sobre temas como la reubicación de testigos, la liberación interina y la ejecución de sentencias.

Con los acuerdos marco, los Estados acuerdan comprometerse con la Corte para desarrollar acuerdos de cooperación que estén en línea con los requisitos de ambas partes, antes de que llegue cualquier solicitud

específica de la CPI sobre cooperación. Dicho compromiso también brinda una oportunidad para el desarrollo gradual de la capacidad nacional, cumpliendo así con las normas internacionales de los derechos humanos y dejando a los Estados la opción de rechazar solicitudes formales. Dichos acuerdos reducen no solo las actividades de la Corte, sino también su presupuesto. La Corte también ha destacado el valor de los Memorandos de Entendimiento entre la CPI y las organizaciones internacionales, como la ONUCDD, en relación con la creación de capacidades para facilitar las formas de cooperación previstas.

La Corte ha preparado acuerdos marco modelo para facilitar las capacidades de los Estados Partes a la hora de recibir y atender los pedidos de la CPI, cuando sea necesario, en relación con la reubicación y la protección de testigos, cuando sea preciso acoger a personas liberadas (acusados) o ejecutar las sentencias de la CPI. En 2017, la Secretaría de la CPI publicó un manual actualizado donde se definen los acuerdos marco actualmente disponibles, y absuelve las dudas sobre cualquier obligación que estos puedan crear para los Estados Partes: https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/Cooperation_Agreements_spa.pdf

En 2019, los co-facilitadores realizaron consultas informales con los Estados que están considerando firmar un acuerdo con la Corte.

A noviembre de 2019, se han celebrado los siguientes acuerdos de cooperación:

- 12 acuerdos de cooperación sobre ejecución de sentencias;
- 2 acuerdos *ad hoc* de ejecución de sentencias con la República Democrática del Congo;
- 21 acuerdos de reubicación de testigos;
- 1 acuerdo de liberación de personas, con Argentina;
- 2 acuerdos de libertad provisional, con Argentina y Bélgica

12. No-cooperación

La falta de cooperación de los Estados es uno de los grandes desafíos que enfrenta la Corte en su trabajo. En un esfuerzo por abordar este desafío, el 7 de febrero de 2019, la Mesa de la AEP nombró a cinco puntos focales para la no-cooperación, uno por cada grupo regional, de acuerdo con los procedimientos de la Asamblea sobre no-cooperación: la República de Corea, Liechtenstein, Colombia, Croacia y Senegal.

Los puntos focales para la no-cooperación deben involucrarse activamente con las partes interesadas relevantes, esto incluye a la sociedad civil, en temas relacionados con la no-cooperación, como los viajes de personas sujetas a órdenes de arresto de la CPI y las acciones diplomáticas tomadas por los Estados Partes con respecto a dichos viajes. En 2016, los puntos focales desarrollaron un *Kit de herramientas para la implementación de la dimensión informal de los procedimientos de la Asamblea relacionados con la no-cooperación*, como un recurso para que los Estados Partes puedan responder a posibles instancias de no-cooperación.

En el año 2018, la facilitación se enfocó en la actualización del kit de herramientas, que fue formalizada en la 17^o sesión.³

En 2019, el trabajo de los puntos focales consistió principalmente en que los Estados tomen conciencia sobre el kit de herramientas y sobre las importantes consideraciones del mismo.

³https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP17/ICC-ASP-17-31-ENG.pdf#page=14.

13. Eficiencia y efectividad de los procedimientos

Los prolongados procesos judiciales han sido una característica de los tribunales penales internacionales, y la CPI no es una excepción. Se podrían esperar mejoras en los tiempos luego de los primeros juicios de la Corte, pero con las crecientes demandas de justicia internacional, el aumento de las denuncias de delitos contra la administración de justicia y las políticas restrictivas para financiar instituciones internacionales, lograr una mejora significativa en la eficiencia de los procedimientos se ha convertido en una tarea urgente y prioritaria para la CPI.

Sin embargo, cualquier esfuerzo que intente mejorar la eficiencia debe proteger al mismo tiempo la efectividad de los procedimientos, ya que la CPI busca garantizar una justicia oportuna para las víctimas, mantener los estándares internacionales para los acusados, y reforzar la confianza en el sistema del Estatuto de Roma.

En el Grupo de Estudio sobre Gobernanza (GEG) – un grupo de trabajo de la Mesa de la AEP organizado durante todo el año en La Haya para promover un diálogo estructurado entre la Corte y los Estados Partes – los Estados tienen como foco principal el fortalecimiento del marco institucional del sistema del Estatuto de Roma. Este enfoque incluye no solo las iniciativas independientes de la Corte para la mejora de la eficiencia y la efectividad de sus actividades judiciales, sino también las iniciativas con objetivos similares pero que recaen dentro de la competencia de los Estados Partes. Por su parte, la Coalición ha presionado durante años para instaurar revisiones exhaustivas a nivel institucional de los procesos judiciales de la CPI.

En 2019, el GEG fue co-presidido por el Embajador Hiroshi Inomata (Japón) y la Emb. María Teresa Infante Caffi (Chile). El Sr. Reinhard Hassenpflug (Alemania), la Sra. Edith Ngungu (Kenia) y la Sra. Laura Victoria Sánchez (Colombia) fueron los puntos focales.

El GEG sostuvo dos encuentros en 2019, el 5 de julio de 2019 y el 17 de octubre de 2019. Durante los encuentros, el Grupo de Estudio debatió sobre los Indicadores de Desempeño de la Corte, con presentaciones de la Presidencia, la Secretaría y la Fiscalía, y un encuentro judicial que tuvo lugar al comienzo de octubre de 2019.

El ejercicio para desarrollar indicadores de desempeño es parte de una iniciativa de la CPI a pedido de la AEP en el año 2014 con el fin de *“intensificar sus esfuerzos para desarrollar indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan a la Corte demostrar mejor sus logros y necesidades, y permitan a los Estados Partes evaluar el desempeño de la Corte de un modo más estratégico.”*

Hasta el momento, la Corte ha emitido tres informes sobre los indicadores de desempeño: en 2015, 2016 y 2017.

En estos informes, la Corte identificó cuatro objetivos clave para el desempeño de la Corte como parte del ejercicio:

- Los procedimientos de la CPI deben ser expeditivos, justos y transparentes en todas las etapas;
- Debe existir una administración y un liderazgo y efectivos en la CPI;
- Garantizar la seguridad en el trabajo de la CPI, esto incluye la protección de aquellos que se encuentran en riesgo por involucrarse con la Corte; y,
- El acceso de las víctimas a la Corte.

El 17 de julio de 2019, la CPI presentó su Plan Estratégico de la Corte para 2019-2021. El Plan Estratégico incluye un análisis del desempeño de la Corte, esto implica (i) lidiar con un número alto y cada vez mayor de situaciones; (ii) un escenario de operación volátil; (iii) cooperación y apoyo político; (iv) recursos; (v) gobernanza interna; (vi) supervisión externa; y (vii) universalidad.

Del mismo modo, el plan estratégico establece los objetivos estratégicos de la CPI en relación con (i) el desempeño judicial y procesal; (ii) la cooperación y la complementariedad; y (iii) el desempeño organizacional.

En un esfuerzo por definir la planificación estratégica de los órganos de la Corte, la Fiscalía y – por primera vez – la Secretaría ha desarrollado sus respectivos planes estratégicos para el periodo 2019-2021.

Entre el 3 y el 4 de octubre de 2019, los jueces de la CPI llevaron a cabo un encuentro para discutir la eficiencia y el funcionamiento del sistema judicial. Como resultado de este encuentro, los jueces adoptaron las “Guías para la redacción de sentencias de la CPI” y las “Guías para la estructura de sentencias de la CPI”, que intentan establecer un enfoque claro de la estructura y el proceso de redacción de las sentencias sobre condenas y absoluciones de la Corte, los plazos máximos para la emisión de las decisiones judiciales claves en las etapas de instrucción, judicial y de apelación; los plazos máximos para la entrega de autorizaciones para las investigaciones; y los plazos máximos para la emisión de sentencias.

La Presidencia de la CPI también informó al GEG acerca de sus discusiones sobre la administración de las transiciones en el sistema judicial durante el encuentro judicial. Durante la 18^o sesión de la AEP se finalizará el informe de los resultados de dicho encuentro.

Participación de las víctimas en los procedimientos

El GEG también recibió información de la Presidencia de la CPI sobre cuestiones relacionadas con las víctimas. La Presidencia de la CPI destacó la importancia de la participación de las víctimas en la Corte, y remarcó que están trabajando para lograr objetivos cuantificables con plazos definidos para mejorar la participación de las víctimas en los procedimientos de la CPI. La Presidencia también notó que los Planes Estratégicos 2019-2021 de los órganos de la CPI otorgan atención a las cuestiones vinculadas con las víctimas en tres temas:

- La protección y el bienestar de las víctimas y testigos;
- La participación y la reparación de las víctimas;
- La comunicación y la administración de las expectativas de las víctimas.

14. Participación de las víctimas y reparaciones

Las víctimas de delitos graves constituyen un eje central del Estatuto de Roma, y son la principal razón detrás del establecimiento de la CPI. El Estatuto de Roma empodera a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y genocidio para llevar a sus victimarios ante la justicia, con el fin de que puedan vivir con esperanza, dignidad y respeto.

La creación de un sistema de justicia retributiva y restaurativa que reconoce a las víctimas como sus beneficiarios últimos es en gran parte producto de los incansables esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil antes y durante la Conferencia de Roma. Las víctimas pueden, a través de un representante legal de la Corte o auto-designado, presentar sus puntos de vista y sus preocupaciones durante los procedimientos ante la CPI (*Consulte el Capítulo 13 para obtener más información sobre las discusiones del año 2019 sobre la participación de las víctimas en los procedimientos de la CPI*).

El Estatuto de Roma también estableció los derechos de las víctimas para solicitar y recibir reparaciones. Las reparaciones no se limitan a la compensación monetaria; pueden venir en muchas formas, como la rehabilitación. Las reparaciones son decididas por los jueces de la Corte y, cuando así lo determinan, administradas por el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV).

El Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas opera bajo la guía de su Consejo de Dirección (Consejo del FFBV), cuyas decisiones son implementadas por la Secretaría del FFBV. El Fondo tiene un doble mandato: (i) implementar las reparaciones ordenadas por la Corte y (ii) proporcionar apoyo físico, psicológico y material a las víctimas y sus familias. Ambos mandatos requieren contribuciones voluntarias para una financiación adecuada.

Reparaciones

El mandato de reparaciones del Fondo Fiduciario está relacionado con procedimientos judiciales específicos ante la Corte que resulten en una condena. Los recursos se recolectan a través de multas o decomisos y adjudicaciones para reparaciones, y son complementados con “otros recursos del Fondo Fiduciario” si el Consejo del FFBV así lo determina.

Actualmente, hay tres casos ante la Corte que se encuentran en la fase de reparaciones, que van desde el borrador del plan de implementación (caso *Al Mahdi* en la situación en Malí), hasta la fase de implementación (casos *Lubanga* y *Katanga* en la situación en la República Democrática del Congo). Cada uno de los tres casos que actualmente están en la etapa de reparaciones involucra diferentes delitos que han resultado en diversos y diferentes daños a las víctimas y sus familias. Se espera que se inicien los procedimientos de reparaciones en el caso *Ntaganda*, luego de la condena del Sr. Bosco Ntaganda en julio de 2019.

La tarea del Fondo Fiduciario, en asociación con la Corte, es garantizar que el diseño de las reparaciones responda a los daños específicos sufridos por las víctimas en cada caso, de acuerdo con lo que hayan encontrado las respectivas Salas de Primera Instancia, y que, a través de una implementación eficiente y oportuna, la promesa de reparación puede convertirse en una realidad concreta y significativa para las víctimas, orientándolas hacia una posible rehabilitación, y hacia la reintegración positiva dentro de sus familias y comunidades.

Frente a estos desarrollos, el Fondo ha solicitado para el 2020 un total de €3.333,0 mil, lo que representa un incremento de €202,7 mil (6.5%) con relación a los €3.130,3 mil que fueron aprobados en el presupuesto de 2019 para cumplir con sus crecientes e intensificadas responsabilidades en la fase de implementación de los procedimientos de reparación. Sin embargo, el Comité de Presupuesto y Finanzas ha recomendado reducciones por un monto de €106,9 mil en el Programa Principal VI de su presupuesto propuesto original. En consecuencia, el Comité recomendó que la Asamblea aprobara un monto total de €3.226,1 mil para el FFBV (*Consulte el Capítulo 18 para obtener más información sobre el Presupuesto Propuesto de la Corte para 2020 y las recomendaciones relacionadas de CPF*).

15. Política de la CPI sobre asistencia legal

En 2016, durante su 15° sesión, la AEP solicitó a la Corte reevaluar la eficiencia del sistema de asistencia legal para "*defender y fortalecer los principios del sistema de asistencia legal, a saber, juicio justo, objetividad, transparencia, economía, continuidad y flexibilidad*"⁴. Para ello, la Secretaría contrató los servicios del Sr. Richard Rodger, un experto independiente que realizó un análisis y preparó un informe sobre el Sistema de Asistencia Legal de la Corte. El Informe analiza el sistema de asistencia legal activo en la CPI y lo compara con los sistemas utilizados por otros tribunales. Asimismo, destacó que el esquema actual no otorga una remuneración apropiada a los abogados e identificó las áreas que pueden mejorarse.

A partir de este informe, a comienzos de 2019, la Sección de Apoyo a los Abogados (SAA) y la División de Servicios Judiciales (DSJ) organizaron diálogos con partes interesadas y la sociedad civil, con el objetivo de elaborar una nueva política para la asistencia legal de la CPI (PAL). La propuesta de enmienda al "*Borrador de Política para la asistencia legal de la Corte Penal Internacional*" estuvo lista en julio de 2019.

Se realizaron consultas adicionales sobre la reforma del sistema de asistencia legal de la CPI, en el marco de la facilitación sobre Asistencia Legal, liderada por el Embajador Sabine Nölke (Canadá). Luego de realizar consultas con la Secretaría, los Estados Partes y la sociedad civil, el facilitador opinó que, en su forma actual, el borrador propuesto no se encontraba listo para la consideración de la Asamblea durante su 18° sesión, dado que aún existían cuestiones no resueltas, y recomendó, en el Informe sobre Asistencia legal, que la Asamblea ordene la realización de más consultas sobre la política.

La sociedad civil y los miembros de la coalición involucrados en los debates han señalado algunos temas que necesitarían mayor discusión, en particular la remuneración de los abogados y los miembros del equipo (incluyendo impuestos, reducción de remuneración por múltiples casos y por períodos de actividad reducida); inseguridad laboral; vulnerabilidad de los abogados junior y el personal de apoyo; cuestiones de género; el presupuesto para investigaciones de la defensa; y el presupuesto sobre el terreno para los equipos de las víctimas.

16. Universalidad del Estatuto de Roma

La ratificación mundial del Estatuto de Roma es necesaria para lograr un sistema internacional de justicia penal que erradique la existencia de refugios para las personas que cometen los peores crímenes conocidos por la humanidad. La CPI se esfuerza activamente por acabar con la impunidad al responsabilizar a los autores de los delitos internacionales más graves.

Para que la CPI sea verdaderamente exitosa, la membresía universal es un componente integral. Al unirse a la CPI, los Estados pueden dar a la Corte un alcance global, aumentando así el acceso a la justicia de las víctimas. A través de la membresía, los Estados también pueden trabajar para mejorar la eficiencia y la eficacia de la justicia internacional, presentar candidatos para su elección como funcionarios de la CPI y la AEP; y proponer enmiendas a los principales textos de la CPI.

Igualmente importante es la implementación completa y efectiva de las disposiciones de complementariedad y cooperación del Estatuto de Roma en los marcos legales nacionales. Esto permite a los Estados contar con el marco legal necesario para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos de delitos del ER a nivel nacional.

⁴ ICC-ASP/15/Res.5, párr. 64.

También permite un apoyo y una cooperación más efectivos con la Corte, particularmente en áreas como la ejecución de órdenes de arresto y la entrega, y en la obtención de información y la recolección de pruebas en el territorio de Estados donde se alega que se han cometido delitos internacionales. La implementación del ER también permite una modernización de los sistemas legales nacionales, ya que muchas disposiciones del ER son progresivas y progresistas, por ejemplo, en la participación de las víctimas y en la violencia sexual y de género. Finalmente, a través de la implementación, los Estados pueden adoptar disposiciones más protectoras a nivel nacional, basándose en las disposiciones del Estatuto de Roma pero incorporando estándares más altos a nivel interno (por ejemplo, algunos Estados han criminalizado el reclutamiento, alistamiento y uso de niños y niñas soldados cuando son menores de 18 años).

En su quinta sesión en 2006, la Asamblea de los Estados Partes adoptó el *“Plan de acción de la Asamblea de los Estados Partes para lograr la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”*. El Plan de Acción exhorta a los Estados Partes a hacer un uso proactivo de los medios políticos, financieros y técnicos a su disposición para promover la universalidad y la plena implementación del Estatuto de Roma a través de relaciones bilaterales, regionales y multilaterales. También solicita a la Secretaría de la AEP que apoye a los Estados en sus esfuerzos por promover la universalidad y la plena implementación del Estatuto actuando como un punto focal para el intercambio de información. El Plan también solicita a los Estados que proporcionen anualmente a la Secretaría de la AEP información sobre las acciones que han emprendido para promover la ratificación y la plena implementación del Estatuto de Roma. Al 12 de noviembre de 2019, solo 3 Estados habían respondido a la solicitud de 2019: Benín, Sudáfrica y Uruguay.

El Informe de la Mesa sobre el *Plan de acción de la Asamblea de los Estados Partes para lograr la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional* se encuentra disponible [aquí](#) en inglés.

Se incluirán recomendaciones para promover la universalidad en 2020 en la resolución “ómnibus” a ser adoptada en la AEP18.

Desarrollos recientes

El 17 de marzo de 2018, el gobierno de Filipinas notificó a la Oficina de Tratados de la ONU su intención de retirarse del Estatuto de Roma. La denuncia al tratado entró en vigor un año después del depósito de la notificación, el 17 de marzo de 2019, reduciendo el número de Estados Partes a 122. El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI anunció que llevaría a cabo un examen preliminar sobre la situación en Filipinas. Un retiro no tiene ningún impacto en los procedimientos en curso ni en cualquier cuestión que la Corte ya estuviera considerando antes de la fecha en que la denuncia haya surtido efectos; ni en el estatus de ningún juez que ya se desempeñe en la Corte. El juez de la CPI Raul Cano Pangalangan, elegido el 24 de junio de 2015, es nacional de Filipinas.

Por su parte, luego de una votación a favor de la adhesión por parte del Gabinete Malayo, el 4 de marzo de 2019 Malasia notificó su adhesión al Estatuto de Roma, y se encontraba camino de convertirse en el 123° Estado Parte una vez que la adhesión entrara en vigor. Sin embargo, apenas un mes después, el 5 de abril de 2019, el Primer Ministro de Malasia anunció que su gobierno tenía la intención de retroceder en su decisión y retirarse del Estatuto de Roma, lo cual fue formalmente confirmado por la ONU el 29 de abril (dado que el tratado iba a entrar en vigor en junio de 2019, técnicamente Malasia no se retiró del tratado, sino que retiró su instrumento de adhesión). La decisión de Malasia de retractar su adhesión constituye un retroceso en su compromiso con un orden internacional basado en normas y la lucha contra la impunidad de crímenes atroces.

Finalmente, el 26 de noviembre de 2019, Kiribati depositó su instrumento de adhesión al Estatuto de Roma y se convertirá en su 123° Estado Parte, una vez que la adhesión entre en vigor el 1° de febrero de 2020 (el

primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento).

17. Complementariedad

De acuerdo con el principio de complementariedad, el pilar fundamental del Estatuto de Roma, los Estados Partes tienen el deber de investigar y juzgar todos los delitos del Estatuto de Roma que ocurren dentro de sus respectivas jurisdicciones y, por lo tanto, deben asumir el papel principal en la aplicación del Estatuto de Roma a nivel nacional. En caso de que un Estado Parte no pueda o no quiera responsabilizar a los autores de crímenes internacionales, la CPI decidirá si investiga y juzga, cubriendo así la brecha de impunidad.

La CPI reconoce que la falta de capacidades o de voluntad política puede ser responsable de la falta de investigaciones y enjuiciamientos genuinos de delitos internacionales en los tribunales nacionales. Aun así, la CPI solo asume la responsabilidad del procesamiento de los mayores responsables de los crímenes más graves, lo que deja a las jurisdicciones nacionales un papel importante que desempeñar para hacer frente a los demás responsables, incluyendo a los de menor rango. Por lo tanto, tener sistemas nacionales judiciales fuertes contribuirá decididamente a la lucha contra la impunidad. En la 16^o sesión de la AEP en 2017, los Estados Partes decidieron que en el 2018 *"continuarán el diálogo con la Corte y otras partes interesadas sobre la complementariedad, incluyendo la complementariedad relacionada con las actividades de desarrollo de capacidades de la comunidad internacional para ayudar a las jurisdicciones nacionales en posibles estrategias de ejecución de la Corte para situaciones específicas y el papel de las asociaciones con las autoridades nacionales y otros actores en este sentido, incluyendo también la asistencia en temas como la protección de testigos y los delitos sexuales y de género"*.

El 7 de febrero de 2019, la Mesa reeligió a Australia y Rumania como puntos focales sobre complementariedad para facilitar las discusiones en La Haya, Nueva York y otros lugares.

Discusiones sobre complementariedad en 2019

Si bien el principio de complementariedad, tal como está consagrado en el Estatuto de Roma, trata sobre el rol de la CPI como Corte de último recurso después de que las jurisdicciones nacionales se muestren incapaces o no estén dispuestas a investigar y procesar los principales delitos internacionales, la "complementariedad positiva" se refiere más específicamente al fomento de las capacidades nacionales en relación con tales investigaciones y procesamiento.

Las consultas entre los Estados Partes, la Corte, la sociedad civil y otros actores en relación con la complementariedad han resaltado las diferencias en la comprensión de lo que significa la complementariedad en la práctica para la Corte, la AEP y los sistemas nacionales, teniendo en cuenta las limitaciones del mandato y los desafíos de la financiación, la coordinación y la voluntad política.

Los puntos focales señalaron que el papel de la AEP al respecto es continuar desarrollando sus esfuerzos para facilitar el intercambio de información entre la Corte, los Estados Partes y otras partes interesadas con el objetivo de fortalecer las jurisdicciones nacionales.

En el año 2019, se llevaron a cabo varias reuniones sobre el tema de la complementariedad con las partes interesadas relevantes, incluidos los Estados, todos los órganos de la Corte, representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Las reuniones se centraron en cómo los Estados tienen la responsabilidad primaria de ejercer su jurisdicción penal sobre los delitos establecidos en el Estatuto; el Artículo 18 del

Estatuto de Roma (decisiones preliminares relativas a la admisibilidad); y los esfuerzos de las jurisdicciones nacionales, regionales e internacionales para investigar o procesar los delitos del Estatuto de Roma.

Las discusiones que tuvieron lugar en el 2019, en el contexto de la facilitación sobre complementariedad del Grupo de Trabajo de La Haya, se centraron en la efectiva implementación interna del Estatuto de Roma para reforzar la capacidad de las jurisdicciones nacionales para juzgar a los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. En particular, las discusiones entre los Estados Partes se centraron en el Artículo 17 del Estatuto de Roma y temas de admisibilidad, Estrategias de Cierre, y varias actividades emprendidas por la Fiscalía al respecto. La especial relación entre la complementariedad y las estrategias de cierre fueron destacadas por la Fiscalía.

El 22 de marzo de 2019, la Secretaría de la AEP compartió con los Estados Parte una “Plataforma de Complementariedad para la asistencia técnica”, dirigida a facilitar los vínculos entre los Estados Partes que buscan asistencia técnica y los actores que podría apoyar a las jurisdicciones nacionales en sus esfuerzos por reforzar la capacidad para investigar o juzgar crímenes del Estatuto de Roma. La Secretaría de la AEP ha hecho público que se han recibido numerosas solicitudes, relacionadas a un amplio abanico de áreas, incluyendo el desarrollo de capacidades, la protección de víctimas y testigos, el apoyo psicológico, el apoyo en materia de seguridad, la recolección de evidencia, la construcción de capacidades para personal de las fiscalías a nivel nacional, y la modernización de la administración de justicia.

El informe de la Mesa sobre Complementariedad del año 2019 será presentado en la 18^o sesión de la AEP.

18. Presupuesto 2020 de la Corte

Para financiar la mayoría de las actividades y programas principales de la Corte, los Estados Partes del Estatuto de Roma deben pagar una contribución anual proporcional a sus ingresos nacionales brutos.

El Secretario de la CPI coordina la redacción de la solicitud de presupuesto general de la Corte durante el año previo a la sesión del segundo semestre del Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) de la AEP, que luego hace recomendaciones sobre el presupuesto propuesto para la consideración de la AEP durante su sesión anual.

Durante el año 2019, los Estados Partes consideraron asuntos presupuestarios dentro del Grupo de Trabajo sobre Presupuesto de la Mesa de la AEP, facilitado por la Embajadora Marlene Bonnici (Malta). Una sub-facilitación sobre la Gestión y Supervisión del Presupuesto dirigida por la Embajadora Annika Markovic (Suecia) continuó, al igual que las discusiones sobre la sede y otras oficinas de la CPI bajo la dirección la Sra. Marija Stajić Radivojša (Serbia).

Si bien la Coalición no toma una posición sobre la cantidad específica de recursos que se deben asignar a la CPI en un año determinado, sí insta a los Estados a tomar la revisión y las recomendaciones del CPF como el enfoque mínimo en sus discusiones presupuestarias para 2020 durante la 18^o AEP. Los Estados Partes deben oponerse a la limitación arbitraria del presupuesto de la Corte para 2020, dado que esta socavaría la capacidad de la CPI para ofrecer una justicia justa, efectiva y eficiente. La falta de recursos es un grave impedimento para el funcionamiento óptimo de la Corte.

Propuesta de Presupuesto de la Corte para 2020

La AEP considera las siguientes cifras en su sesión anual de este año:

Presupuesto propuesto de la CPI para 2020: €146,94 millones

[Aumento propuesto del presupuesto de la CPI aprobado para 2019: €2,39 millones (1,7%)]

Intereses y cuotas del préstamo del Estado anfitrión de 2018: €3,585 millones

Pedido total para el presupuesto de la CPI: €150,524 millones

Estas cifras se encuentran recogidas en el Proyecto de Presupuesto por Programas de la CPI (PPP) para 2020. Para el año 2020, la CPI solicita un presupuesto mayor que el aprobado por la AEP durante su 17^o sesión en 2018, pero menor que el presupuesto que la CPI solicitó en su PPP para 2019.

Entre los factores que la Corte ha indicado que impactan en el aumento de presupuesto en relación con el presupuesto aprobado para 2019 son (i) los recientes ajustes al Régimen Común de las Naciones Unidas (“RCNU”) (€2,4 millones)⁵; y (ii) la necesidad de realizar reemplazos de bienes de capital para el mantenimiento de las instalaciones de la Corte (€1,3 millones).

De acuerdo al PPP, sin considerar los factores anteriores, el PPP para 2020 representa una disminución real de alrededor de €1,3 millones “en la capacidad que la Corte necesita para implementar su mandato a tenor de las prioridades, hipótesis y parámetros previstos”⁶.

El PPP para 2020 propone una reducción presupuestaria para la Judicatura, la Secretaría y el Secretariado de la AEP. Por otro lado, sugiere aumento en el presupuesto para la Fiscalía, el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, el Mecanismo de Supervisión Independiente y la Oficina de Auditoría Interna (“OAI”). De igual manera, a excepción del presupuesto propuesto para las Instalaciones Permanentes, el MSI y la OAI, el presupuesto del año 2020 propuesto para todos los Programas Principales es menor al presupuesto solicitado para esos mismos Programas Principales en el PPP de 2019.

Asimismo, el PPP para 2020 destaca cómo una política de crecimiento nominal cero impacta negativamente en la capacidad de la Corte para cumplir con su mandato. El PPP explica que, aunque algunos de los órganos han seguido una “metodología flexible respecto de la asignación de los recursos”, la Corte necesita recursos adicionales para poder llevar a cabo sus actividades de manera eficaz.

La Coalición ha pedido de forma constante a la Corte y al CPF que apoyen un presupuesto de la CPI que sea eficiente y basado en sus necesidades, de forma que permita a la Corte cumplir efectivamente con su mandato.

Recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas

Para preparar sus recomendaciones finales para la AEP, el CPF, un cuerpo técnico experto de la AEP encargado de evaluar y hacer recomendaciones sobre las particulares necesidades presupuestarias de la CPI, considera diversos requisitos procesales, judiciales y organizativos, así como las obligaciones de la Corte con los acusados y las víctimas durante sus reuniones semestrales. Después de evaluar la propuesta de presupuesto de la Corte para 2020, el CPF recomendó las siguientes cifras para la consideración de la AEP en su 18^o sesión (*con excepción del Préstamo del Estado Anfitrión*):

Presupuesto de la CPI para 2020 recomendado por el CPF: **€145,72 millones**

Reducción recomendada respecto al presupuesto solicitado por la Corte para 2020: €1,446 millones

⁵ Conforme al PPP, el RCNU revisó y aumentó los salarios para puestos profesionales en alrededor 1.8 por ciento.

⁶ PPP, párr. 7

Aumento recomendado respecto al presupuesto de la Corte aprobado para 2019: €943.000 (0,81%)

En su informe, el CPF reiteró que uno de los problemas más apremiantes para la Corte es el déficit de liquidez. El comité expresó su preocupación de que el posible impacto de esta problemática se comience a sentir en diciembre de 2019. El CPF evaluó las solicitudes de reclasificación de los puestos de funcionarios de la CPI sometidas para 2020, y recomendó que la Asamblea apruebe nueve de las doce solicitudes de reclasificación. Sin embargo, el Comité recomendó que la Corte no remita nuevas solicitudes de reclasificación hasta que haya finalizado la nueva revisión de la Instrucción Administrativa (IA). El CPF también tomó nota de los importantes desarrollos de la CPI que afectan al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, en particular en lo que respecta a las reparaciones (*consulte el Capítulo 14 para obtener más información sobre reparaciones en 2019*).

Las recomendaciones del CPF para el financiamiento de los principales programas de la Corte en 2020 fueron las siguientes:

- Programa principal I – Judicatura: €12,1 millones (*una disminución del 0,2% del Presupuesto por Programa Aprobado de 2019 (PPA)*);
- Programa principal II – Fiscalía: €47,4 millones (*un aumento del 1,2 % del PPA de 2019*);
- Programa principal III – Secretaría: €76,2 millones (*una reducción del 0,7% del PPA de 2019*);
- Programa principal IV – Secretaría de la AEP: €2,8 millones (*una reducción del 0,2% del PPA de 2019*);
- Programa principal V – Locales: €2,7 millones (*un aumento del 54,2% del PPA de 2019*);
- Programa principal VI – Secretaría del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas: €3,2 millones (*un aumento del 3,1% del PPA de 2019*);
- Programa principal VII-5 – Mecanismo de Supervisión Independiente: €551,9 mil (*un aumento del 3,9% del PPA de 2019*);
- Programa principal VII-6 – Oficina de Auditoría Interna: €721,2 mil (*un aumento del 5,2% del PPA de 2019*).

Programa Principal	Presupuesto aprobado de 2019 (miles de Euros)	Presupuesto propuesto para 2020 (miles de Euros)	Presupuesto recomendado por el CPF para 2020 (miles de Euros)
I: Judicatura	12.107,6	12.094,8	12.081,5
II: Fiscalía	46.802,5	47.936,3	47.383,4
III: Secretaría	76.651,2	76.145,5	76.147,6
IV: Secretaría de la AEP	2.841,7	2.837,0	2.837,0
V: Locales	1.800,0	3.088,1	2.775,0
VI: Secretaría del FFBV	3.130,3	3.333,0	3.226,1
VII - 5: MSI	531,1	783,8	551,9
VII – 6: OAI	685,6	721,2	721,2
Subtotal	144.550,0	146.939,7	145.493,0
VII – 2:Préstamo del Estado Anfitrión	3.585,1	3.585,1	3.585,1
Total	148.135,1	150.524,8	149.308,8

Estados Partes en mora

Cuando los Estados Partes están en mora, o aún no han pagado sus cuotas, la Corte no puede acceder a la totalidad del presupuesto que le asigna la AEP. La AEP discute este tema en una facilitación especial del Grupo de Trabajo de Nueva York, actualmente dirigida por el Sr. Nore Alam (Bangladesh).

Según el CPF, €13,05 millones de contribuciones asignadas en 2018 (8,9%) permanecían pendientes al 31 de agosto. El CPF señaló además que las contribuciones pendientes de años anteriores se situaron en €19,85 millones, por un total de €37,97 millones.

De acuerdo con el Artículo 112 (8) del ER, *“El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos”*. Según el CPF, al 31 de agosto de 2019, 13 Estados Partes estaban en mora y, por lo tanto, no eran elegibles para votar en la 18^o AEP.⁷

19. Relación ONU - CPI

El Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) tiene la facultad de remitir situaciones que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales al Fiscal de la CPI para su investigación y posible enjuiciamiento, independientemente de si el Estado en cuestión es parte del Estatuto de Roma. Hasta la fecha, el CSNU ha remitido las situaciones en Darfur, Sudán (2005) y Libia (2011) a la Corte. A fin de mantener al CSNU al tanto de las situaciones que ha remitido, el Fiscal debe informar al Consejo sobre el estado de ambas situaciones remitidas de manera periódica a lo largo del año.

El CSNU también tiene el poder de aplazar las investigaciones de la CPI hasta por un año a la vez si cree que esto contribuye al interés de la paz y la seguridad internacionales.

El Artículo 3 del Acuerdo de Relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas estableció una obligación recíproca de cooperación entre las dos organizaciones. Sin embargo, en detrimento de la justicia internacional, el CSNU ha fallado sistemáticamente a la hora de proporcionar la cooperación o el apoyo financiero necesarios para garantizar que las investigaciones y los enjuiciamientos de la CPI que surjan de sus remisiones sean efectivos. Ciertas disposiciones en las remisiones del CSNU han socavado la capacidad de la CPI para lograr una justicia imparcial, tales como la exclusión explícita de los nacionales de los Estados no-partes de la jurisdicción de la Corte (con excepción de los nacionales del Estado cuya situación es remitida).

La CPI no puede investigar presuntas situaciones de crímenes atroces que involucren a Estados no-partes (y donde los presuntos autores no son nacionales de un Estado Parte) sin una remisión del CSNU. Este es un tema cada vez más apremiante debido a las numerosas violaciones masivas de derechos humanos que se documentan en muchos lugares del mundo en los que la CPI no tiene jurisdicción.

Los cinco miembros permanentes del CSNU – China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos – pueden vetar cualquier resolución que se les presente. En mayo de 2014, a pesar del apoyo de más de 60 miembros de la ONU y cientos de grupos de sociedad civil, Rusia y China vetaron una resolución para remitir las atrocidades generalizadas en Siria a la CPI. Esta fue la primera vez que una resolución de remisión fallaba. Esta selectividad política hacia la justicia por parte de los miembros del CSNU da como resultado un acceso desigual a la justicia para las víctimas de los delitos más graves en todo el mundo, y socava la credibilidad tanto del Consejo como de la CPI.

⁷ Los 13 Estados en mora al 31 de agosto de 2019: Antigua y Barbuda, República Centroafricana (RCA), Chad; Comoras, Congo, Djibuti, República Dominicana, Liberia, Islas Marshall, Níger, Venezuela (República Bolivariana de), y Zambia.

Para abordar esta incoherencia, se han propuesto dos iniciativas independientes con el objetivo de restringir el uso del veto por parte de los miembros del CSNU en situaciones de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad:

El Grupo ACT (por sus siglas en inglés: Justicia, Coherencia, Transparencia) estableció un *Código de Conducta*⁸ en 2015, en el cual los Estados se comprometen a respaldar acciones en el CSNU con el objetivo de prevenir o poner fin a la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto incluye apoyar proyectos de resoluciones creíbles y pedir al Secretario General que continúe utilizando toda la experiencia y las capacidades de alerta temprana del sistema de la ONU. Hasta setiembre de 2019, 120 Estados se han adherido a la iniciativa, incluidos dos miembros permanentes, Francia y el Reino Unido. El Código no está restringido a los miembros elegidos o permanentes del Consejo, sino que pide a todos los Estados Miembros de la ONU que respeten los principios de la Carta de la ONU a través del apoyo al el trabajo del CSNU para mantener la paz y la seguridad internacionales.

De manera similar, la iniciativa Francia-México pide a los cinco miembros permanentes del Consejo que se abstengan voluntariamente de utilizar el veto en situaciones de atrocidades masivas⁹. La iniciativa ha obtenido el apoyo de 102 Estados miembros hasta agosto de 2019.

Aunque la Coalición en su conjunto no asume una posición sobre la remisión de situaciones específicas a la Corte, sí solicita a los cinco miembros permanentes del CSNU que se abstengan de utilizar el veto cuando se traten cuestiones relacionadas con atrocidades masivas y que:

- Apoyen las remisiones a la CPI con una cooperación efectiva, tal como el arresto de sospechosos;
- Alienten el financiamiento de las remisiones a la CPI a través del sistema de la ONU;
- No excluyan a ningún (grupo de) nacional(es) de los Estados no-partes de la jurisdicción de la Corte en las remisiones; y,
- Se involucren en un diálogo constructivo con la Corte.

La Asamblea General de la ONU y la CPI

Cada año, la Corte informa sobre sus actividades a la Asamblea General de la ONU, y el Presidente de la Corte presenta el informe a los Estados Miembros de la ONU en una sesión plenaria. La AGNU elabora una resolución acogiendo el informe y su contenido, y toma nota de la relación en curso entre la ONU y la CPI, normalmente con el apoyo necesario para adoptar la resolución por consenso. Muchos Estados aprovechan la oportunidad que brinda esta sesión plenaria para reiterar su apoyo a la Corte, y destacan la necesidad de una cooperación continua y efectiva entre la CPI y los órganos de la ONU.

Como la Corte enfrenta amenazas continuas, que alientan aún más a sus oponentes, la sesión plenaria de la AGNU de 2019 sobre la CPI brindó un foro único para que los Estados Partes articulen su firme apoyo a la Corte en un formato abierto y público.

La resolución de la AGNU sobre el Informe de la CPI¹⁰, una actualización técnica del año anterior, fue adoptada

⁸"Nota aclaratoria sobre un Código de Conducta para la acción del Consejo de Seguridad contra el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad." 2015. <http://www.centerforunreform.org/sites/default/files/Final%202015-09-01%20SC%20Code%20of%20Conduct%20Atrocity.pdf>

⁹"Declaración política sobre la suspensión del veto en casos de atrocidades masivas – Presentada por Francia y México." 2015. https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf/2015_08_07_veto_political_declaration_en.pdf

¹⁰"Resolución aprobada por la Asamblea General el 4 de noviembre de 2019" A/RES/7/6 <https://undocs.org/A/RES/74/6>

por consenso, 69 Estados co-patrocinaron la resolución, y solo cinco Estados se desvincularon del consenso: Filipinas, Rusia, Myanmar, Siria y Estados Unidos.

20. Enmiendas

Los textos legales de la CPI, como el Estatuto de Roma, las Reglas de Procedimientos y Prueba, y las Reglas de la Corte, pueden estar sujetos a enmiendas. Las enmiendas son una parte vital del Estatuto de Roma, los códigos legales y las reglas en general, dado que permiten que los documentos sigan siendo relevantes en tiempos y contextos cambiantes.

Cualquier Estado Parte puede proponer una enmienda al Estatuto de Roma. La propuesta de enmienda puede ser adoptada por una mayoría de dos tercios de los votos, ya sea en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión. Una enmienda entrará en vigor para todos los Estados Partes un año después de que sea ratificada por siete octavos de los Estados Partes. Existe un procedimiento diferente para las enmiendas a los artículos sobre los principales crímenes del Estatuto de Roma.

Grupo de Trabajo sobre Enmiendas en 2019

El Grupo de Trabajo sobre Enmiendas (GTE) de la AEP, presidido este año por el Embajador Juan Sandoval Mendiola (México) con base en Nueva York, busca lograr una mayor claridad en las opiniones de fondo sobre las propuestas de enmienda disponibles y sobre los procedimientos que se deben seguir a la hora de lidiar con las propuestas de enmienda. También se prepara para informar a la AEP para la consideración de las enmiendas durante su sesión anual. Las sesiones del GTE no están abiertas a la sociedad civil ni a los Estados observadores, salvo indicación en contrario. No obstante, el Presidente del grupo brinda actualizaciones regulares al GTNY sobre los progresos de las discusiones.

Durante 2019, el trabajo del GTE cubrió varias cuestiones:

- Aumentar el número de ratificaciones de las enmiendas al Artículo 8, y continuar las discusiones sobre la cuarta propuesta de enmienda sobre el uso de minas antipersonales. Bélgica acordó mantener esta cuestión sobre la mesa, pero las discusiones han sido pausadas por el momento, como deferencia a la propuesta hecha por Suiza;¹¹
- Hace varios años México presentó una propuesta de enmienda al GTE para criminalizar el uso de armas nucleares en el Estatuto de Roma. Como sucedió en años recientes, las discusiones sobre este tema estuvieron sobre la mesa, pero fueron pospuestas.
- En 2018, Suiza presentó una nueva propuesta para incluir la hambruna como un crimen de guerra en el contexto de los conflictos armados no internacionales (CANI) de acuerdo con el Artículo 8. Durante el proceso de negociación del Estatuto de Roma en 1998, el borrador del Estatuto había incluido la hambruna en los CANI, pero no logró llegar al borrador final que finalmente se adoptó. En 2019, las discusiones del GTE se centraron en la propuesta presentada por Suiza.

Actualmente, el Estatuto criminaliza el uso de la hambruna como crimen de guerra solo en el contexto de conflictos armados internacionales (CAI). Si bien la disposición que tipifica la hambruna como crimen de guerra, el Artículo 8.2(b)xxv, se refiere a los Convenios de Ginebra, el lenguaje propuesto por Suiza utiliza

¹¹Durante la 16^ª sesión de la Asamblea, los Estados Partes adoptaron por consenso tres enmiendas al artículo 8 (“Crímenes de Guerra”) del Estatuto de Roma: el uso de armas que utilicen agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas; el uso de armas cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no pueden localizarse por rayos X; y el uso de armas láser cegadoras. La propuesta belga original incluía cuatro enmiendas a los crímenes de guerra. Durante las negociaciones, la cuarta propuesta de enmienda, el uso de minas antipersonales, fracasó, y la Asamblea procedió a adoptar las tres restantes.

Derecho Internacional Humanitario consuetudinario como base legal para su inclusión en el Estatuto.

En 2019, las discusiones del GTE incluyeron la cuestión de la “fragmentación” del Estatuto de Roma, señalándose algunas preocupaciones sobre el impacto negativo que puede tener la proliferación de enmiendas sobre la estabilidad del documento.

El 28 de agosto de 2019, de conformidad con el artículo 121(1) del Estatuto de Roma, Suiza presentó su propuesta de enmienda al Artículo 8 ante el Secretario General de la ONU.¹²

La propuesta de enmienda será considerada este año en la 18^o sesión de la AEP. Conforme al Artículo 121(3) del Estatuto de Roma, para adoptar la enmienda, se requiere el voto a favor de dos tercios de los Estados Partes.

21. Mecanismo de Supervisión Independiente

El Mecanismo de Supervisión Independiente (MSI) fue establecido por la Asamblea en su 8^o sesión en noviembre de 2009 (ICC-ASP/8/Res.1) de acuerdo con el Artículo 112 (4) del Estatuto de Roma. El mandato operacional del MSI fue definido por la Asamblea en su 12^o encuentro en noviembre de 2013 (ICC-ASP/12/Res. 6) que estableció un alcance claro de la autoridad de investigación y discrecional del MSI.

El objetivo del MSI es ofrecer una supervisión significativa de la Corte a través del mandato de llevar a cabo inspecciones y evaluaciones a pedido de la Asamblea o de su Mesa, y realizar investigaciones a discreción sobre informes que recibe de presuntas faltas de conductas, faltas de conductas graves o actos ilícitos por parte de los oficiales electos, miembros del personal y cualquier otro miembro de la Corte.

Durante 2019, el MSI realizó una evaluación de la administración de la Secretaría del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Esta evaluación fue solicitada por la Asamblea en su 17^o sesión con el propósito de mejorar el funcionamiento del Fondo Fiduciario.¹³ En relación a esta labor, se realizaron consultas con el Vicepresidente de la Asamblea, H.E. Embajador Jens-Otto Horslund, con el anterior facilitador sobre presupuesto, el Presidente de la Mesa Directiva del FFBV, el Secretario, y el Director Ejecutivo de la Secretaría del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas.

El 17 de setiembre de 2019, durante la 8^o reunión de la Mesa de la AEP, el Jefe del MSI informó que el MSI había culminado todas las investigaciones de 2018 y se encontraba actualmente lidiando con las investigaciones de 2019. Adicionalmente, señaló que los casos relacionados con la Secretaría habían sido completados en su mayoría.

22. La resolución ómnibus

En cada una de sus sesiones desde 2003, la Asamblea de Estados Partes ha adoptado una resolución ómnibus, formalmente titulada “Fortaleciendo la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes.” La resolución ómnibus trata un amplio rango de cuestiones claves, prácticas y políticas en relación con la Corte, la AEP y otros actores involucrados.

¹²<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.399.2019-Eng.pdf>

¹³ Resolución ICC-ASP/17/Res.4, Sección L, párr. 7

La AEP adoptará una versión actualizada de la resolución ómnibus este año, siguiendo las consultas del GTNY presidido por el facilitador el Sr. Vincent Rittener (Suiza). Las facilitaciones en el GTNY y el GTLH también contribuyen al texto de la resolución ómnibus, con informes de varias facilitaciones que contienen lenguaje sugerido para incluir en la resolución.

Temas ómnibus, facilitaciones relacionadas y puntos focales

Hay otros temas que también se tratarán en la Resolución ómnibus de 2019. La lista de temas que presentamos a continuación indica aquellos que ya han sido discutidos en las facilitaciones de la Mesa de la AEP como parte de los preparativos para la 19^o sesión de la AEP. La resolución ómnibus incluirá la fecha de la próxima sesión de la AEP, así como los mandatos de la Mesa de la AEP para 2020. La Mesa se reunirá al comienzo del próximo año para designar facilitadores y puntos focales para los temas aprobados.

- **Universalidad y plena implementación del Estatuto de Roma**
Puntos focales: Países Bajos y la República de Corea
- **Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC)**
- **Cooperación**
Co-Facilitación (GTLH): Embajador Luis Vassy (Francia) y Embajador Momar Gueye (Senegal)
- **Estado anfitrión**
- **Relación con las Naciones Unidas**
- **Relación con otras organizaciones internacionales y organismos**
- **Actividades de la Corte**
- **Elecciones (*Revisión del procedimiento de nominación y elección de jueces*)**
Facilitación: Sr. Luke Roughton (Nueva Zelanda)
- **Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes**
- **Representación Legal**
- **Asistencia Legal**
- **Grupo de Estudio sobre Gobernanza (GEG)**
Co-Facilitación (GTLH): Embajador Hiroshi Inomata (Japón) y Embajadora María Teresa Infante Caffi (Chile)
Puntos focales: Sr. Reinhard Hassenpflug (Alemania), Sra. Edith Ngungu (Kenia) y Sra. Laura Victoria Sanchez (Colombia)
- **Procedimientos de la Corte**
- **Revisión de los métodos de trabajo**
- **Víctimas y comunidades afectadas, reparaciones, y el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas**
- **Reclutamiento de Personal (*Representación geográfica y balance de género del personal de la Corte*)**
Facilitación (GTNY): Sra. Kristina Pelkiö (República Checa)
- **Complementariedad**
Puntos focales (GTLH): Sr. Jarrod Jolly (Australia) y Sra. Raluca Karassi-Rădulescu (Rumania)
- **Mecanismo de Supervisión Independiente**
- **Presupuesto por Programa**
Facilitación: Embajadora Marlene Bonnici (Malta)
- **Consideración de enmiendas (*Grupo de Trabajo sobre Enmiendas*)**
Facilitación (GTNY): Embajador Juan Sandoval Mendiolea (México)
- **Participación en la Asamblea de Estados Partes**

23. Acrónimos y términos importantes

CAN	Comité Asesor sobre las Nominación de Jueces
PPA	Presupuesto por Programa Aprobado
AEP	Asamblea de los Estados Partes
AEP18	La sesión de la AEP de 2018
UA	Unión Africana
CdD	Consejo de Directores
Mesa de la AEP	El Presidente, los vicepresidentes, el Relator y los 18 Estados Partes
CPF	Comité de Presupuesto y Finanzas
CCPI/Coalición	Coalición por la Corte Penal Internacional
SAL	Sección de Asesoramiento Legal
DSJ	División de Servicios Judiciales
UE	Unión Europea
GRULAC	Grupo de Latinoamérica y el Caribe
GTH/GTLH	El Grupo de Trabajo de La Haya de la Mesa de la AEP
CAI	Conflicto Armado Internacional
MSI	Mecanismo de Supervisión Independiente
MOAN	Región de Medio Oriente y África del Norte
CANI	Conflicto Armado de Carácter No-Internacional
ONG	Organización No Gubernamental
GTNY	Grupo de Trabajo de Nueva York
OEA	Organización de los Estados Americanos
OP	Párrafos operativos de una Resolución
Fiscalía	Oficina de la Fiscal de la CPI
Omnibus Resolution	Una resolución de la AEP titulada formalmente: “ <i>Fortalecer la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes</i> ”
EP	Examen Preliminar

PP	Párrafos del Preámbulo de una Resolución
Plenario	Discusiones generales en la AEO con la asistencia de todos los Estados Partes
Presidencia de la CPI	Presidente: Juez Chile Eboe-Osuji (Nigeria); Primer Vicepresidente: Juez Robert Fremr (República Checa); Segundo Vicepresidente: Juez Marc Perrin de Brichambaut (Francia)
RPP	Reglas de Procedimiento y Prueba
SAEP	Secretaría de la AEP
ODS	Objetivos de Desarrollo Sustentable
Estatuto/ER	Estatuto de Roma, documento fundacional de la CPI y la legislación que los Estados deben ratificar para convertirse en miembros de la CPI
VSG/CSG	Violencia Sexual y de Género / Crímenes Sexuales y de Género
GEG/Grupo de Estudio	Grupo de Estudio sobre Gobernanza
FFBV	Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas
ONU	Naciones Unidas
AGNU	Asamblea general de las Naciones Unidas
CSNU	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
SGNU	Secretario General de las Naciones Unidas
UVT	Unidad de Víctimas y Testigos (de la Secretaría de la CPI)

